

INTRODUCCIÓN

UNA TARDE A INICIOS DE MARZO DE 2002, seguí la ruta de la avenida 10 de agosto, una de las arterias centrales de la ciudad de Quito, hasta encontrar una multitud de aproximadamente 700 personas apostada frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, que obligaba a las unidades del trolebús a desviar su curso habitual. Hombres y mujeres portaban el tricolor patrio y pancartas; y muchos de ellos, a juzgar por sus ropas informales algo ajadas, venían de lejos. Al borde de uno de los carriles de la vía, varios de ellos exhortaban a quienes conducían los vehículos que pasaban por el lugar a “pitar” en apoyo de su causa. Sin saber, seguramente, cuál era esa causa ni cuál el motivo de la protesta, la mayoría de los interpelados –de extracción popular y media y, aun, representantes de una burocracia estatal acomodada– oprimían las bocinas, sumándose a la cacofonía que servía de fondo sonoro a los gritos de la muchedumbre: “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Ahí están, esos son los que joden a la nación”.

Me adentré en la compacta aglomeración de los manifestantes, y sólo entonces tomé conocimiento de que se trataba de una movilización de los empleados administrativos de la educación, quienes demandaban ante “el ministro de la plata” la elevación de sus salarios –el salario del empleado público medio en el Ecuador con dificultad sobrepasa los 200 dólares– en un 100%, así como el desembolso de los sueldos vencidos (incumplimiento que, en los últimos años, forma parte de una silenciosa política de Estado, con relación a los servidores públicos).

¿Por qué, sin saber a ciencia cierta el motivo de la manifestación, muchos transeúntes se sumaron a ella? ¿Pensaban, a la distancia, que se trataba de la exigencia de la devolución de los dineros engullidos por algún fracasado y deshonesto banquero, durante la crisis bancaria de inicios de 1999 y después de ella?

En el Ecuador de fin de siglo, sobre todo en ciudades serranas como Quito y Cuenca, era frecuente observar el apoyo de la población a las acciones públicas de fuerzas sociales que dicen reivindicar mejoras de la calidad de vida, movilizarse en contra de la implantación del modelo neoliberal, o sencillamente protestar contra un “otro” a veces indefinido, pero responsable de las penurias actuales. Aquella tarde constaté, sorprendida, la adhesión incierta, pero firme, del transeúnte casual a una de las muchas manifestaciones de descontento, que ocurría en un momento de aparente (o tensa) calma social. Ocurría esto en un momento en que los otrora aguerridos protagonistas de los levantamientos indígenas –que muchas veces durante los años noventa paralizaron vías urbanas y carreteras en todo el país– se desentendieron de la participación en la huelga nacional convocada por la Coordinadora de Movimientos Sociales para el 20 y 21 de febrero de ese año, en rechazo a la venta de las empresas estatales de distribución de energía eléctrica, una importante y rentable rama del patrimonio nacional.

La protesta de la que he dado testimonio fue una más de las innumerables manifestaciones de lo que Margarita López Maya (2002) denomina “la política de la calle”, que en el Ecuador ha formado parte de la rutina pública de manera sostenida desde hace más de dos décadas, coincidiendo con los presagios de la crisis económica, social y política.

Lo narrado indicaría que, a pesar de las dubitaciones de algunos sectores del movimiento indígena –cuyas cúpulas a la sazón se encontraban preocupados por las definiciones preelectorales y las búsquedas de inclusión en el establishment político– en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana latía un estado de exaltación permanente por los efectos sociales y económicos de la dolarización y el avance de la economía de mercado y su marco institucional, que coincidían con tendencias sociopolíticas de agudización de la conflictividad expresadas en toda América Latina y que, en países como Ecuador y Perú, se configuran como protestas de alcance nacional de cuestionamiento a la legitimidad e institucionalidad política (Seoane y Taddei, 2000).

Habría, pues, una disposición para el descontento permanente, latente en los ánimos colectivos, en virtud del quiebre del curso acostumbrado de la vida cotidiana y de la relativa holgura que trajo consigo, sobre todo para los sectores medios, la era petrolera. Tal “espontaneidad” se mantendría, a pesar del declive de sujetos de la protesta predominantes antaño, como es el caso del Frente Unitario

de los Trabajadores (FUT), que reunía a las centrales sindicales más importantes. Pero, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos manifestantes, y sus adherentes de ocasión? ¿Qué es lo que provoca –como durante el masivo derrocamiento de Bucaram, el 5 de febrero de 1997, y la impugnación del mandato de Mahuad, el 21 de enero de 2000– que los tiempos de la protesta “normal” (parafraseando a Kuhn) cedan el paso a los de protesta “extraordinaria” y de ruptura? ¿Cuál es el alcance de tal ruptura?

A inicios del siglo XXI, la protesta de las fuerzas intensamente movilizadas durante muchos años parece implosionar. Así, las fuerzas de la protesta, otrora radical, se asemejan más y más al sediento que se atraganta con el agua que le aplaca la sed: en las elecciones de noviembre de 2002 llegó al poder el coronel Lucio Gutiérrez, ex insurgente del 21 de enero de 2002, quien se declaró buen aliado de Estados Unidos, apoyándolo inclusive en la invasión a Irak. Su triunfo se debe, en grado considerable, al apoyo de la población indígena serrana, y contó en su gabinete con dos de sus más destacados dirigentes en las carteras de Relaciones Exteriores y Agricultura, así como con un representante del Movimiento Popular Democrático, reconocida como fuerza partidaria de la izquierda política, en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya en la presidencia, Gutiérrez no se ha diferenciado mucho de los gobiernos que le precedieron, en lo relativo a las políticas económicas que lleva adelante.

Vale de paso mencionar que hacia mediados de la primera década del tercer milenio parece que asistiríamos a una reconfiguración radical del campo político-ideológico, pues se han establecido alianzas que para muchos analistas resultan ser “contra natura”. Así han sido calificados, por ejemplo, los acuerdos –aunque puntuales– entre el partido de gobierno, Sociedad Patriótica, y fuerzas autodefinidas como de izquierda, tales como el Movimiento Popular Democrático y sectores socialistas, a las que se sumarían los “populismos” de Bucaram y Álvaro Noboa, junto con los demopopulares; de otro lado, vemos coaligados a antiguos adversarios como el Partido Social Cristiano y la socialdemocracia de nuevo cuño, junto con *Pachacútek*, aliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y cogestor de una activa censura a las orientaciones neoliberales de los gobiernos de los noventa.

Así, como sugería Pablo Dávalos, el movimiento indígena, a pesar de haber detentando espacios institucionales de alto nivel, tendría menos poder que antes de ganar las elecciones. Dávalos se pregunta: “¿Es necesario ganar las elecciones en cualquier tipo de alianzas para ser poder? ¿Podrá el movimiento indígena ecuatoriano recuperar los espacios perdidos desde que pensó, o se imaginó que llegar al gobierno

significaba ‘ser o tener poder’? ¿Habrá aprendido que el poder está más allá de una eventual participación en un gobierno y que esos pequeños espacios de tipo institucional, por importantes que sean, no ameritan poner en riesgo todo un proyecto histórico?” (Dávalos en Ojarasca, 2003). Así, según este mismo analista, los indígenas se habrían convertido, gracias a la “alquimia” del poder, “en los facilitadores políticos de un modelo neoliberal cuya agenda estaba pendiente” (Dávalos citado en Ojarasca, 2003). Se trataría, en todo caso, de un efecto colateral de la política de la dirección indígena, producido quizá por cierta unilateralidad en el planteamiento de la relación con el poder, y también en el énfasis excesivo de estos sectores en la dimensión étnica, que oblitera la dimensión clasista y, en general, social más amplia, y que torna inconsistente la enunciación de objetivos de cara a los resultados reales de su actuación política.

Con todo, la historia de este jaque mate no comenzaría en noviembre de 2002, sino a partir de enero de 2001, cuando tras el levantamiento indígena de esa fecha y el desarrollo de las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno y la adopción del acuerdo de 21 puntos, la administración del presidente Gustavo Noboa desistió de radicalizar la agenda de privatizaciones y eliminación de los subsidios al combustible, con lo que la protesta entra en el “limbo” político, puesto que no hubo desmovilización, pero tampoco radicalización. El hábil manejo del conflicto por parte de Noboa conllevó la continuidad del régimen de dolarización, con lo que las fuerzas opositoras al mismo, lideradas por el movimiento indígena, hubieron de desandar el camino recorrido durante los últimos años del siglo XX. En noviembre de 2002, con el triunfo de Gutiérrez, y sobre todo a partir de los primeros meses de 2003, se rompió definitivamente el equilibrio entre las fuerzas que impulsan el ajuste y las opositoras, a favor de las primeras. Por otro lado, se cerró un ciclo de protesta, en el que esta se manifestó intensamente y se caracterizó por el liderazgo indígena, y al que podríamos denominar “la larga década de los noventa”.

Ya en el poder, a partir de enero de 2003, la CONAIE y el movimiento *Pachacútek* experimentaron serias limitaciones para llevar adelante el proyecto de gobierno diseñado en las mesas de trabajo programático desarrolladas entre la primera y la segunda ronda electoral. Un proyecto que contemplaba la reactivación productiva, el desarrollo del turismo, el impulso a la agricultura, y la lucha contra la corrupción, entre otros puntos. Las limitaciones se expresaron no solamente debido a la propia envergadura de los problemas a resolver, sino sobre todo –según lo que mencionó el ex subsecretario de gobierno Augusto Barrera en la entrevista que nos concediera– debido a que, de entrada, dichas fuerzas debieron atenuar sus expectativas programáticas, en

razón de la conflictiva relación con el gobierno y el partido Sociedad Patriótica, pero también de discrepancias internas entre la dirigencia indígena y el movimiento *Pachacútek* sobre la permanencia en el gobierno. La ruptura fue, entonces, preanunciada por el propio curso de las acciones iniciales de Gutiérrez y su entorno de gobierno. ¿Ha devuelto dicha ruptura la vitalidad y presencia contestataria al movimiento indígena? Al menos por el momento, las acciones parecen circunscriptas a la actuación electoral y a la lucha parlamentaria, contexto en el que las alianzas políticas parecen tener un cariz más bien pragmático y de flexibilidad en aras de enfrentar situaciones concretas, mientras se agudiza la fragmentación de la organización. De ahí que la contestación al ajuste adolecerá de serias limitaciones, pues la movilización continuará con la profundización de la crisis social, pero probablemente estará circunscripta a las demandas sectoriales y, sobre todo, ocurrirá dentro de la estrategia impuesta por los sectores políticos de extrema derecha, liderados por el Partido Social Cristiano, y la elites económicas “modernizadoras” (tal sería el caso de la protesta de los servidores públicos que, en noviembre de 2004, exigían el cumplimiento de la Ley de Homologación Salarial, decretada por el gobierno de Gutiérrez, como parte de la reforma económica neoliberal).

En síntesis, no está del todo claro el futuro del movimiento indígena; tampoco se ha configurado el abanico de alianzas socio-políticas en el que habrá de sustentarse la contestación al ajuste. Lo que está claro es que en adelante se precisa del diseño de nuevas metas y estrategias, nuevos lenguajes –tanto en la política como en las ciencias sociales–, así como una nueva filosofía de alianzas que reconozca la trayectoria de los años noventa, sus aciertos y errores.

En lo que a nuestros propósitos concierne, vale la pena preguntarse, para deslindar campos con el determinismo de una hipótesis conspirativa ¿son los límites de la política indígena y de otras fuerzas opuestas al ajuste el resultado de un trabajo “de inteligencia” de los estrategas políticos de las elites gobernantes? ¿O lo son de un ejercicio hegemónico, de la propia debilidad que entrañan las creencias y prácticas políticas que acompañan la protesta tanto de personas comunes, como de dirigentes de las fuerzas sociales configuradas?

En esta ocasión, deseamos indagar sobre los orígenes de tales *impasses*, así como de la pujanza de la crítica al ajuste durante “la larga década del noventa”, enfatizando en sus años finales. A este efecto, hemos invitado a tres grandes fuerzas nacionales, con el fin de averiguar acerca de las concepciones sobre la movilización y su participación en la protesta, a través del diálogo con sus representantes. Dichas fuerzas socio-políticas han sido seleccionadas como fuente de información, en virtud de que, con mayor o menor visibilidad y éxito, han mantenido un

discurso crítico de manera sostenida, a través de la voz de sus miembros de base y/o dirigentes locales e intermedios, generalmente menos visibles y audibles en el ámbito nacional, ciudadanos o ciudadanas comunes que constituyen el “tejido” fundamental de la movilización y la protesta, y que autorizan el ejercicio de una posición dirigencial a los líderes nacionales, en tanto enunciadores de experiencias colectivas, dando “un cuerpo biológico a un cuerpo constituido” (Bourdieu, 1998: 83, 89-91, 119).

Como veremos en su momento, la comprensión de estas voces y acciones, así como de sus virtualidades democráticas y limitaciones, estará orientada por el concepto de “ideología”, en tanto lucha en el terreno de los significados (Eagleton, 1996). Y en esta línea conceptual, hemos comprendido a las identidades de la protesta como momentos de la ideología, es decir como relatos, personales y colectivos, que han permitido encarnar tanto a la contestación a las políticas de institucionalización del ajuste, como a la desmovilización y suspensión de la conciencia crítica.

CONTEXTOS, HEGEMONÍAS Y LUCHAS

Llegando a este punto, deseo reflexionar sobre la inscripción histórica y la significación de las luchas sociales y políticas desarrolladas a partir de la segunda mitad de los años noventa en el Ecuador, así como esbozar las condiciones de la hegemonía en las que estas se desenvuelven.

Al situar la protesta a partir de mediados de la década de los años noventa, es menester contextualizarla en la entrada del país en lo que ha sido denominado “la tercera ola neoliberal” (Petras y Morley, 2000). La entrada sostenida a la lógica de las reformas neoliberales fue emprendida con ritmo sostenido desde por el gobierno de Durán-Dahik (fundamentalmente en materia política). Desde 1996, el gobierno de Bucaram intentó presionar para que el ajuste sea acelerado y para que las reformas neoliberales pendientes se hagan realidad. A partir de ese año, los efectos sociales de tales reformas, y la cada vez más profunda precarización de la sociedad, se han acompañado de la intensificación de la protesta.

Un reconocimiento inicial del momento histórico se refiere al carácter de la transición política inaugurada a inicios de los años ochenta. Según Enrique de la Garza Toledo, “a partir de 1982, en América Latina ha habido dos transiciones políticas. Una ha sido de la dictadura militar al pluralismo político y, posteriormente, al neoliberalismo civil [...]. La otra ha sido en los países que no tenían dictadura militar, de régimen autoritario, caracterizados por el monopolio o duopolio partidario, al pluralismo político y al surgimiento de fuerzas políticas alternativas” (De la Garza Toledo, 2001: 14).

El proceso político ecuatoriano, entre la década de los ochenta y la de los noventa, parece aproximarse al primer tipo de transición; de ahí que la ebullición social y política que caracteriza al Ecuador durante la década de los noventa deba ser entendida en ese contexto. La incidencia de la protesta en el mismo ha tenido repercusiones y significados polívocos para la instauración del “neoliberalismo civil”, paralelo al advenimiento del pluralismo político, refrendado en la reforma jurídico-política del Estado de fines de los años setenta. Las interpretaciones de la protesta, por tanto, no pueden evitar registrar la contradictoria inscripción de la misma en la construcción política y discursiva de este “neoliberalismo civil” que en la década de los noventa entra en una fase de mayor extensión y radicalización de sus lineamientos, con una presión inédita por el ahondamiento de la desestatización. Imperativo que se torna crucial desde la perspectiva del ajuste, pues a pesar de los avances del “neoliberalismo civil” durante los gobiernos de Hurtado y Febres Cordero¹, los posteriores gobiernos reciben un legado de los años ochenta, en el cual subsiste una continuidad del Estado en tanto espacio de interlocución y negociación/puja con el movimiento obrero y sectores como el magisterio, estudiantes, etc., a pesar de las “magras” conquistas de las huelgas nacionales (Pérez Sáinz, 1985). En los años noventa, con su proyecto de desestatización radical y contrarreforma agraria, de lo que se trata es de eliminar esta posibilidad, aun cuando se han preservado espacios de satisfacción de los intereses de los grupos económicos dominantes (como fue evidente, por ejemplo, en los casos de salvataje bancario).

Es precisamente en la senda de la desestatización radical y las políticas contrarreformistas en el tema agrario, donde adquiere una importancia singular la reconfiguración de la hegemonía, a través de estrategias discursivas y simbólicas específicas. Sus logros políticos son quizás su más importante triunfo durante los años noventa, pues el pluralismo político y el respeto formal a la existencia de polos político-organizativos de contestación se acompañan de mutaciones notables en las representaciones oficiales y mediáticas sobre la sociedad, el conflicto y la protesta. Tal representación tiene un anclaje en interdicciones de figuras políticas y sociales emblemáticas de las luchas de los

¹ Para César Montúfar, por ejemplo, el proyecto de la derecha neoliberal ecuatoriana en los años ochenta habría fracasado, “no porque no se haya liberalizado casi completamente la economía desde 1984, sino porque el grupo que intentó hegemonizarlo ha sido incapaz de lograr que los principios del neoliberalismo no solo económico sino político pasen a determinar las interacciones entre Estado, sociedad y economía. La economía como la sociedad en el Ecuador siguen estatizadas; el comportamiento de los actores económicos y sociales todavía se articula por los recursos y prebendas que pueden extraer del Estado” (Montúfar, 2000: 9).

años ochenta, y ellas son sometidas, desde los enunciadores oficiales, y desde luego desde los medios de comunicación, ora a desplazamientos discursivos, ora a supresiones y a la criminalización eufemizada de la protesta. Por ejemplo, tras el primer levantamiento de la CONAIE en 1990, cuyas demandas incluían, entre otras cosas, la profundización de ciertos aspectos de la reforma agraria, exhibiendo un corte clasista y étnico-cultural, ya hacia mediados de la década se afianza la aceptación oficial de los pronunciamientos con contenido étnico, adquiriendo preponderancia lo “indígena” frente a lo “campesino” (y aquí vino como anillo al dedo el debilitamiento de las dimensiones clasistas a nivel de algunos sectores de la dirigencia indígena).

Para el caso del movimiento estudiantil, por otra parte, se operaría un desprestigio de la protesta –más aun cuando muchas de las demandas apuntaban directamente a la reformulación de políticas de Estado, tanto en el campo de la educación como de la implementación del ajuste–, sumado al enunciado de la “juventud” y una preocupación por crear ciertas condiciones de inclusión en tanto “jóvenes”.

En el caso del movimiento sindical, en cambio, la enunciación oficial no parece operar desplazamiento alguno en el que el icono sea sustituido, sino más bien una supresión, que es simultánea a una incisiva campaña de desprestigio del sindicalismo en todas sus vertientes, acompañándolo, además, de las modificaciones de las reglas del juego mediante las transformaciones del Código del Trabajo y la reorganización de la producción.

Por todo esto, uno de los factores del declive y la poca visibilidad de algunas de las expresiones sociales y políticas de la contestación sería –además de la ausencia de propuestas alternativas de sociedad, de la desmovilización y de la fragmentación organizativa– el déficit político-simbólico, y la brecha discursiva que caracterizó su presencia política.

Esta lógica de visibilización/desplazamiento/ocultamiento incidiría también en la representación de lo social elaborada desde las ciencias sociales, una parcela de las cuales se ha regido por tales pautas, preconizando la aparición de “un nuevo actor social” y profetizando la desaparición de los actores “tradicionales” (en sintonía con el *modus operandi* mediático), cuando en realidad, como veremos, de lo que se trataba es de un creciente incremento de la conflictividad laboral y salarial, y de una resistencia activa a las privatizaciones, aun cuando ciertamente de manera dispersa.

La hegemonía ha funcionado, entonces, con una lógica sutilmente disruptiva: son represiones discursivas “limpias” (tanto como las representaciones televisadas de las guerras de Irak), es decir sin violencia material a la vista. Represiones que, pasado el primer sobresalto y la primera perplejidad (frente a una supuesta “abolición de las

antiguas certezas”), se deslizan como sobre ruedas, reconfigurando el campo de producción ideológica. Esa represión “limpia” es, como se ha dicho, potencializada por el peso de los medios de comunicación y sus peculiares métodos de inducción de verdades y consensos, al operar, no solo mediante la profusión de signos, sino también mediante el juego de visibilización-ocultamiento de los emblemas políticos, su sobreexposición y/o supresión. Michel Foucault decía que lo que hace que el poder sea aceptado “es simplemente que no sea solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho circula, produce cosas, induce al placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo más como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social que como una instancia negativa que tiene como función reprimir” (Foucault, 1999: 48). Y es en la trama de esta productividad discursiva y flujo de saberes y placeres donde se construyen las significaciones políticas, en un entorno en el que operan, como argumentaba Foucault, interdicciones, clasificaciones, recortes y disciplinamiento de los enunciados (Foucault, 1996).

Como sabemos, el análisis realizado por ese autor en *El orden del discurso* derivaría de la experiencia del *modus operandi* del estalinismo. Una matriz discursiva similar encontramos hoy en día en el *modus operandi* del neoliberalismo y el “pensamiento único”, que ha naturalizado los procesos sociales, económicos y políticos e invisibilizado el conflicto y la contestación al orden². A eso Jameson (1999), siguiendo a Stuart Hall, ha denominado “lucha discursiva”, y es en ese terreno que se ha operado la supresión de ciertos tópicos, con la correspondiente invisibilización de los sujetos críticos del dogma del mercado. Es así como, por ejemplo, en el caso ecuatoriano a partir de los años noventa desaparecen del horizonte mediático fuerzas sociales como los sindicatos o los campesinos. O reaparecen bajo la forma de abyección (con la criminalización de la protesta de por medio). Y eso causa perplejidad, mientras la interrupción del flujo apacible de los nuevos lugares comunes y abyecciones requiere nuevas y denodadas astucias, demandando comprensiones renovadas de la hegemonía y la política.

Tales lenguajes y modos de representación están claramente inscriptos en la época de los años noventa; hoy en día nos compete superar esos enfoques y lenguajes, pues no han ayudado para el conocimiento de la sociedad de fin de siglo, propiciando más bien la legitimación de un nuevo orden discursivo cuyas prácticas es menester aprender a de-

² En la entrevista concedida a M. Fontana, Foucault relata que la inspiración de las concepciones vertidas en *El orden del discurso* provendría de la experiencia de la supresión dogmática por parte de los post-estalinistas de todos aquellos enunciados que no calzaban en la vulgata oficial en torno a la ciencia (Foucault, 1999).

codificar. Nos cabe, pues, recuperar una visión de futuro y, sobre todo, actualizar la discusión política.

LOS SUPUESTOS DE PARTIDA

La tesis central aquí sustentada es que la protesta social en el Ecuador de fin de siglo, aspecto fundamental de la crisis política, encuentra su fuente de inspiración, por una parte, en la experiencia de una ciudadanía social trunca, y de una economía moral expresada en el rechazo de la corrupción, percibida como usurpación y engaño, como la fuente de privaciones del acceso a derechos, recursos y servicios que caracterizan a la vida moderna³. La contestación emerge en un contexto de orientaciones políticas contradictorias y, en gran medida, gracias al contrapunto que establecen la democratización de la sociedad ecuatoriana a partir de los años setenta, y las cada vez más acentuadas tendencias hacia la desigualdad social y económica al finalizar el siglo XX; o entre las tendencias hacia una construcción de un estatus ciudadano (en tanto vínculo político basado en la igualdad política, el acceso a recursos) y la “erosión” del sentimiento de pertenencia a la comunidad política⁴. Un elemento de dicha tensión contextual que “ensambla” la protesta sería también, desde mediados de los años noventa, sobre todo para los grupos indígenas y campesinos –pero también para ciertos grupos urbanos medios– el despertar de un sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada”, y la ausencia de acciones del Estado (que en muchas mentes se encarna en personajes concretos de la política) que refrenden con la garantía de los derechos sociales ese sentimiento de pertenencia, y la fidelidad a un territorio y a unos símbolos.

El sentimiento de pertenencia se manifiesta también a través de la intolerancia a los abusos del poder y la corrupción de los gobernantes en el manejo de la cosa pública, a los excesos y el rebasamiento de ciertos límites de actuación. Empero estos tópicos no siempre son politizados ni demandan una reformulación del sentido político y social de las instituciones, sino la sustitución de sus personeros. Estos

3 Según Bryan Turner, el estatuto de ciudadanía implica derechos y obligaciones, la forma y tipo de tales derechos y obligaciones, las fuerzas sociales que producen tales prácticas y, por último, las condiciones (*arrangements*) sociales a través de las cuales dichos beneficios son distribuidos a los diferentes sectores de la sociedad (Turner: 1993: 3). por otro lado, Stephen Kalberg sostiene que, en términos de las fuerzas culturales que sostienen las prácticas de la ciudadanía moderna, los componentes centrales son: la responsabilidad cívica, la confianza social, el igualitarismo y el individualismo universalmente orientado (Kalberg, 1993: 91).

4 Pablo Andrade encuentra tal contradictoriedad expresada, por una parte, en la creciente igualdad y afirmación de las libertades políticas y, por otra parte, en la erosión del sentimiento de pertenencia a la comunidad política (Andrade, 2002). Esta pauta analítica se encuentra recuperada y profundizada en el primer capítulo del presente trabajo.

elementos del sentimiento de inconformidad asumen configuraciones y contenidos diversos en cada grupo socio-cultural abordado, traduciendo una polifonía social en la que el malestar con el estado de cosas y el cuestionamiento a los gobernantes y/o políticos se expresa en acciones que van desde la inconformidad y la protesta hasta la emigración y el exilio económico.

La protesta desde mediados de los años noventa apuntaría a demandas tan básicas, cuanto universales (que frecuentemente se entrelazan con reivindicaciones específicas como las étnicas) como son las aspiraciones a estándares decorosos de vida, acceso a la educación, la salud, el trabajo y –¿por qué no?– al consumo, que intentarían contrarrestar la creciente precarización de la sociedad. Hacia los últimos años del siglo XX, estas demandas sociales se entrelazan con el cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones políticas vigentes, lo que logra su máxima expresión en la impugnación a los poderes del Estado, y en la demanda de la plurinacionalidad.

Me he referido aquí a un concepto eminente elaborado por Benedict Anderson en *Comunidades Imaginadas* (Anderson, 1993). El enfoque de la nación como formación cultural –que surge del pensarse colectivo simultáneo como miembros de una comunidad “imaginada” (nunca se conocerá a todos sus miembros), “limitada” (dentro de ciertas fronteras territoriales) y “soberana” (en tanto libre)– nos ayuda a comprender el suelo emotivo y una gran parcela de los contenidos ideológicos que sustentaron la experiencia de los/as diversos/as movilizadas/as durante estos años. Tales contenidos y sentimientos serían el punto de partida para las interpelaciones al Estado y sus elites dirigentes, y el cimiento de una “ciudadanía de sentido común” (concepto de Andrés Guerrero).

El sentimiento de ciudadanía se expresaría más en el clamor por los derechos que en el reconocimiento de las obligaciones. Tal anclaje no representaría una minusvalía de la ética ciudadana, sino una forma de “ciudadanía social de sentido común” que supone un sentido de pertenencia a la “comunidad imaginada”, la conciencia sobre un conjunto de derechos inalienables y prácticas de participación en demanda del acceso a tales derechos, recursos y servicios (que parcialmente fueron provistos por el Estado desarrollista de los años sesenta y setenta, ver Andrade, 2002).

Por otra parte, es menester precisar que he deseado hacer un trabajo de historia contemporánea, pues los sujetos aquí analizados han instituido, como diría Rojas, “un modo específico de pasar el tiempo” (Rojas, 2001: 42). Tal modo peculiar se extendería desde octubre de 1996 hasta más o menos mediados de 2002, y sus cualidades obedecerían a dos circunstancias fundamentales.

La primera: es precisamente en estos años que hemos vivido lo que he denominado un ciclo de “aceleración del ajuste”. Es decir que, si durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y, sobre todo, Sixto Durán Ballén las reformas neoliberales se intentaban instaurar de manera más o menos parsimoniosa, ya a partir del gobierno de Bucaram, pasando por Mahuad y Noboa, el ritmo del ajuste se apresura y se presiona por la viabilización de medidas altamente conflictuantes, como la eliminación de los subsidios del gas. Además el ciclo coincide con la agudización de la crisis económica y fiscal (a lo que nos referiremos en el Capítulo I); entonces, ese cuadro socio-económico se constituye en el “contexto desencadenante” del ciclo de intensificación de la protesta. En lo posterior, la protesta decae; sobre todo, el gobierno de Noboa “administra” la crisis sin realizar medidas rechazadas anteriormente, tales como la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica, pero también, entregando fondos en las visitas que el presidente realizaba a las provincias durante las festividades locales (CAAP, 2002b: 51). Veremos en adelante cómo este hecho fue positivamente percibido, desde una expectativa asistencialista, abrigada por los protagonistas de las protestas indígenas de fin de siglo.

La segunda circunstancia radica en que desde las elecciones de 2002 estaríamos asistiendo a un nuevo momento o ciclo político, que quizá coincide, nuevamente, con la dinámica de estabilización de la economía. Es decir, no es que esta se haya recuperado, pues persiste hacia finales de 2003 una inflación del 6% que se estima elevada para una economía dolarizada (ILDIS, 2003: 23). Por otro lado, los indicadores sociales señalan una mayor precarización de las condiciones de vida de la población. Empero, los ritmos de deterioro parecen desacelerarse en comparación con los fatídicos años 1998-1999, cuando la tasa de desempleo se disparó al 14,4%. El mismo indicador en el 2003 bordeó el 11% (sin la válvula de escape que representa la emigración, los índices de desempleo y subempleo señalarían una hecatombe social). Por otro lado, a pesar de que el salario real ha tendido a estabilizarse, se trata apenas de indicadores promedio que desconsideran los extremos, en uno de los cuales la mayoría sobrevive con ingresos ínfimos, mientras que tal tendencia al equilibrio social redundaría en la profundización del desempleo (ILDIS, 2003: 39).

La protesta, de todos modos, no ha cesado y hemos sido testigos en el 2004 de acciones radicales y prolongadas, como la de los jubilados a mediados del año, o de los servidores públicos en el mes de noviembre. La movilización, sin embargo, ha carecido de la articulación y despliegue generalizado que otrora le imprimieron tanto la CONAIE y otras organizaciones campesino-indígenas, cuanto la Coordinadora de Mo-

vimientos Sociales en alianza con el Frente Unitario de Trabajadores, como por ejemplo ocurrió a principios de 1997.

¿Cómo entender la latencia de la protesta o ebullición sectorializada que vivimos desde entonces? Este fenómeno estaría configurado por varias situaciones. En primera instancia, la inconformidad habría sido canalizada por vías institucionales, a través de la elección de Gutiérrez y la inclusión en el gobierno, aunque pasajera y conflictiva, de representantes de la CONAIE –fue notable la presencia de Luis Macas como ministro de Agricultura– y el partido *Pachacútek*, quienes intentan durante el lapso de enero de 2003 hasta agosto del mismo año, fecha de la ruptura, contrapesar las presiones del ajuste realizadas a través sobre todo, de los ministerios de Finanzas y Comercio Exterior. En segunda instancia, las organizaciones que alentaron la movilización en años anteriores estarían atravesando momentos críticos –como la CONAIE que al momento enfrenta discrepancias internas–, viéndose abocada también a una redefinición de estilo político, como a una reconceptualización de las alianzas dentro del mismo campo indígena (la Federación de Indígenas Evangélicos, por ejemplo, ha desplegado acciones de respaldo al gobierno; y el dirigente del ala amazónica de la CONAIE, Antonio Vargas, ha sido nombrado ministro de Bienestar Social, con lo que se habría conseguido moderar la movilización indígena); en lo que al FUT concierne, ha sufrido un proceso de franco desvanecimiento. De otro lado, como hemos mencionado, la emigración continúa de manera sostenida, y ello permitiría una mitigación importante de los efectos del desempleo: es notorio, por ejemplo, que a pesar de los elevados índices en el país no haya surgido un movimiento de desocupados; por otra parte, es interesante anotar que los montos de las remesas de los emigrantes ascendieron de 1432 millones de dólares en el 2002 a 1600 millones superando a las inversiones extranjeras (ILDIS, 2003). Por último, es muy probable que en la población esté latiendo una “fatiga cívica” de cara a la ineficacia de las impugnaciones presidenciales de los últimos años, y a la irremediable precarización de las condiciones de vida.

Pero sobre todo, es la mentada reconfiguración del campo político-ideológico, junto con la “re-ingeniería” de las pautas éticas que modelan los estilos políticos, entre las que hoy se manifiestan brotes de una especie de práctica “ascéptica”, a-partidaria y “post”-ideológica de la ciudadanía (un medio adaptable a diversos fines, entre ellos a la defensa de una institucionalidad caduca y antidemocrática y aun a la creación de dispositivos de violencia y represión paraestatal, como fue la denominada Marcha Blanca convocada por el alcalde de Guayaquil en enero de 2005) lo que nos indicaría el tránsito de un ciclo político a otro, a partir de mediados de 2002.

DE LAS PERSPECTIVAS EN TORNO A LA PROTESTA

Por razones evidentes, la protesta social en el Ecuador ha sido, en los últimos años –bajo la denominación de “movimientos sociales”– un tema difícil de soslayar. No podemos decir, sin embargo, que en todos sus componentes sociológicos se haya profundizado de manera suficiente. Así, mientras el tema indígena, en general, ha suscitado una verdadera “explosión discursiva” –referida al tema de la protesta o no– la visión de otras presencias públicas se vio opacada casi por completo. Y esto podría deberse no solamente a la importancia política de la CONAIE durante los años noventa, sino en gran medida también a la débil institucionalización y arraigo de la investigación social en el país, que dificulta a los/las investigadores/as la dedicación sostenida a temas que están al margen de las urgencias sociales y políticas. Por otro lado, para comprender la cancelación del tema de la protesta y presencia social de sectores como el movimiento obrero y estudiantil, prevaecientemente vinculados a la izquierda, habría, asimismo, que considerar, ya en el plano político-discursivo, la censura frecuentemente más implícita y silenciosa que pesó a partir de 1989 sobre aquellos tópicos. A continuación, antes que un recuento exhaustivo de las perspectivas en torno a la protesta social, veamos algunas de las contribuciones más importantes sobre el tema.

Bajo la óptica de las incidencias del conflicto, dicho fenómeno está siendo registrado continuamente por el Equipo de Coyuntura del Centro Andino de Acción Popular (CAAP), colectivo que desde hace algunos años nos ofrece en forma cuatrimestral, a través de la revista *Ecuador Debate*, datos “frescos” sobre la conflictividad social y política. Se trata de una perspectiva sociográfica y analítico-coyuntural que permite identificar tanto las dinámicas y contenidos de los conflictos socio-políticos más relevantes, como a los sujetos de dichos conflictos y los desenlaces de los mismos; es, pues, en ese marco que es posible leer las características generales de la protesta social de diversos sectores, incluidos sindicatos y estudiantes. También dentro de una visión general del conflicto y de un corte analítico-coyuntural, podemos encontrar referencias a dichos sectores en el trabajo de Mario Unda Soriano *Ecuador: conflictos sociales en el año 2000* (Unda Soriano, 2001).

Como hemos dicho, con respecto a la problemática indígena los años noventa, en general, se vio surgir una multiplicidad de trabajos, publicados en libros de autoría múltiple e individual, pero sobre todo en revistas nacionales y extranjeras. En 1992 fue publicada la obra colectiva de Ayala, Maldonado, Kowii, Ramón y otros: *Pueblos indios, estado y derecho*, trabajo que representa la memoria del Seminario del mismo nombre realizado en Quito en abril de 1991; el tratamiento del tema tiene un enfoque multidisciplinar y constituye un balance de la

presencia de los pueblos indígenas y su relación con la nación, desde el punto de vista histórico, jurídico, antropológico y político (Ayala et al., 1992). Uno de los trabajos de investigación de mayor aliento es la obra colectiva editada por Muratorio (1994): *Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos, siglos XIX y XX*; así como la compilación *Etnicidades*, realizada por Guerrero (2000), obras en las que destacamos los textos de Guerrero (1994 y 2000), consagrados al tema de las formas históricas de la dominación étnica. Una muestra de esa profusión de perspectivas sobre la temática indígena es, entre otras, el trabajo compilado por Angélica Bernal: *De la exclusión a la participación. Pueblos indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador* (Bernal, 2000), que conjuga miradas jurídicas, antropológicas y políticas sobre los cambios operados en la relación pueblos indígenas-Estado en el Ecuador de finales del siglo XX.

En una primera “ronda” de investigaciones sobre el tema de la movilización indígena, un trabajo relevante ha sido la obra colectiva: *Indios. Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990* (Almeida et al., 1991), en el que desde una pluralidad de miradas se fue analizado el primer levantamiento indígena de junio de 1990, manteniendo en foco los aspectos sociales, el análisis de las reivindicaciones, y los aspectos político-organizativos del levantamiento. León Trujillo, por su parte, dedica su obra: *De campesinos a ciudadanos diferentes* al análisis de la constitución de las identidades del levantamiento de 1990 en relación a los referentes étnicos, ciudadanos y de clase (León Trujillo, 1994). El levantamiento de 1994 mereció, asimismo, artículos como el de Andrés Guerrero: “El levantamiento indígena de 1994. Discurso y representación política en Ecuador” (Guerrero, 1996), en el que se resalta el tema de la lucha por el reconocimiento étnico y cultural.

En una segunda “ronda”, aparecen nuevos autores abordando el tema de la protesta indígena, en trabajos referidos al tema que es objeto de nuestro análisis. Tras la aparición de las obras, predominantemente testimoniales, *La rebelión de los indios* (Lucas, 2000) y *Nada sólo para los indios. El levantamiento indígena del 2001* (Lucas y Cucurella, 2001), ve la luz el trabajo de Augusto Barrera Guarderas *Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los años 90* (Barrera Guarderas, 2001), que sintetiza reflexiones sobre dicho período de la movilización indígena. Este autor enfoca la constitución del movimiento indígena, y su acción en el marco de la crisis política y el campo del conflicto creado por la reforma del Estado impulsada sobre todo en la década de los años noventa; los levantamientos realizados en este período son examinados, tal como el autor nos explica, en una “línea simbiótica” de los paradigmas de acción racional, la movilización de recursos y el paradigma de la iden-

tividad; particularmente (Barrera Guarderas, 2001: 61) la identidad es concebida como “cemento” del proyecto étnico, a partir del despliegue de recursos expresivos, y como “estrategia” en la proyección de una lucha redistributiva (Barrera Guarderas, 2001: 145)⁵. Otro autor que ha reflexionado sobre la movilización indígena de finales de los años noventa es Pablo Dávalos. Desde su perspectiva se analizan las estrategias políticas aparejadas a la demanda de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad (Dávalos, 2000 y 2003). Por su parte, Pablo Ospina analiza la relación entre el carácter del sistema político, y cómo este es modulado desde la demanda indígena (Ospina, 2000). Y entre los esfuerzos más importantes de los últimos tiempos encontramos la obra de Fernando Guerrero y Pablo Ospina (2003) *El poder de la comunidad. Movimiento indígena y ajuste estructural en los Andes ecuatorianos*, realizada con apoyo institucional de CLACSO-ASDI; sus autores analizan el tema de la movilización indígena en estrecha relación tanto con las modificaciones de la estructura agraria del Ecuador en el contexto del ajuste estructural, como de las identidades étnicas. El texto actualiza, por otra parte, el debate sobre el problema de la tierra, la reforma agraria y las condiciones actuales del agro serrano; vale decir, el tema de lo “campesino” asociado a lo “indígena”.

Este breve balance sobre la producción ecuatoriana en torno a la protesta revela algunas ausencias. En primer lugar, vemos que dada la centralidad de la problemática de lo “indígena”, en la mayoría de los trabajos ha sido relegada la preocupación sobre la protesta en tanto “campesinado”, que atañe aún a una enorme parcela de la población indígena. En segundo lugar, sentimos la carencia de enfoques sobre la movilización campesina en otras regiones, por ejemplo, en la Sierra Sur, que ha otorgado consistencia nacional a la protesta (tanto en cuanto movilización campesino indígena, digamos, de la provincia del Cañar, como a nivel del Seguro Social Campesino). En tercer lugar, en los trabajos disponibles priman tanto las perspectivas de análisis de fuerzas sociales actuantes en el campo de disputa por la construcción institucional, como de las voces autorizadas, sin que sea abordado un tratamiento del tema desde el punto de vista de los sujetos “rasos” y de los dirigentes intermedios, es decir, en tanto experiencia “desde abajo” de la movilización. Por último, como se ha señalado, la visibilización de la temática de lo indígena se ha acompañado del silencio sobre otras presencias movilizadas. Por eso, las reflexiones desplegadas, sobre todo, en la segunda parte del Capítulo II y en los capítulos III y IV del presente texto tienen una base bibliográfica insuficiente en lo que corresponde

⁵ El autor se guía en este punto por las perspectivas teóricas de Melucci (1989) y Pizzorno (1989 y 1994).

al tratamiento mismo del tema, confiando al análisis presente un carácter provisional e hipotético.

Nuestra tarea central ha sido explorar la protesta en el Ecuador en los últimos años, desde el punto de vista de la ideología, es decir de los significados políticos, así como de los hechos o dichos políticos y económicos que habrían conmovido el sentido más íntimo de quienes se han movilizado durante estos años. Un segundo propósito ha sido el de reflexionar sobre la incidencia de la protesta anti-ajuste y de sus orientaciones y contenidos en el desenlace de la vida pública a fin de siglo. Intentamos saldar las ausencias anotadas, reconociendo los significados de la protesta desplazándonos al Austro serrano del país, localidad política que ha sido vista como periférica en relación a un espacio considerado decisivo para la protesta, como es la sierra centro-norte del Ecuador. Por último, el interés primordial es examinar la ideología de la protesta a través de las representaciones, para lo cual hemos privilegiado el diálogo predominantemente con dirigentes intermedios que no han tenido una gran visibilidad nacional, personas cuyas voces han sido menos audibles y cuyo discurso muestra “desviaciones” de sentido con relación al discurso de las cúpulas, en la medida en que su destinatario no es directamente el Estado en sus instancias nacionales, sino las sociedades locales.

Cabe prevenir que no hemos tenido la pretensión de hacer un trabajo exhaustivo en torno a la protesta, sino que se ha intentado más bien realizar una cierta restitución de los vacíos analíticos de la última década, sobre todo en lo que corresponde a la protesta estudiantil y sindical a partir de nuevos supuestos e interrogantes; pero también ensayar un enfoque diferenciado de aquellos que han sido realizados desde las diversas teorías sobre los movimientos sociales, abordajes bastante difundidos en los años noventa.

El contenido analítico ha sido dividido en cuatro capítulos. El primero sitúa el contexto histórico de la protesta, comprendiendo a esta como constituyente de la crisis política de los últimos años. El segundo capítulo examina la protesta indígena y campesina desde el punto de vista de sus desdoblamientos ideológicos, enfatizando en la complejidad y oscilación entre las demandas específicas y las proyecciones nacionales, así como en las mutaciones que sufren las identidades políticas en las postrimerías del siglo XX. El tercer capítulo nos remite a las búsquedas de afirmación social de ciertos sectores politizados del estudiantado secundario, y a su construcción de los sentidos del mundo. El cuarto capítulo intenta descubrir los entretelones, más bien ocultos durante los años noventa, de la protesta obrero-sindical. En la medida de lo posible, hemos intentado también esbozar los procesos históricos y político-culturales de constitución de los sujetos sociales

de la protesta, recuperando también el tema de los desplazamientos de su representación en la iconografía política oficial de la última década. En la última parte, conclusiva, reflexiono “en voz alta” sobre posibles alternativas para la reconstitución del vigor político y la eficacia de la protesta de dichas fuerzas.

Una última advertencia: al escribir estas páginas no he podido sustraerme de los sentimientos que embargan a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, por eso este texto, que está abierto al debate y lleno de interrogaciones y perplejidades, está también colmado de aspiraciones de cambio y de esperanza, del deseo de bienestar y dignidad para todos y todas. Recorramos pues, junto con nuestros/as testimoniantes, este difícil camino de la historia del Ecuador de los últimos años, anhelando que sus puntos de vista contengan el distanciamiento temporal suficiente que permita hacer justicia a los sujetos colectivos que marcaron nuestro acontecer nacional al eclipsarse el segundo milenio.

Lima, julio de 2003

Cuenca, noviembre de 2004